
-----**CÉDULA DE PUBLICACIÓN**-----

Siendo las 16:00 horas del día 21 de NOVIEMBRE de 2018, se procede a publicar en los Estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el C. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, en contra de "...RESOLUCIÓN DE RECURSO DE RECLAMACIÓN CJ/REC/13/2018-1 Y SU ACUMULADO..."-----

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, punto I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a partir de las 16:00 horas del día 21 de NOVIEMBRE de 2018, se publicita por el término de 72 setenta y dos horas, es decir hasta las 16:00 horas del día 26 de NOVIEMBRE de 2018, en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. -----

Lo anterior para que en el plazo de setenta y dos horas los terceros interesados puedan comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, cumpliendo los requisitos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.-----



**MAURO LOPEZ MEXIA
SECRETARIO EJECUTIVO**

Se recibe el presente escrito de demanda y anexos, en 30 fojas.

Henry Bermúdez.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SALA SUPERIOR



SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE PARTES

DRA. JANINE M. OTALORA MALASSIS

MAGISTRADA PRESIDENTA

SALA SUPERIOR

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
PRESENTE**

ASUNTO: SE PROMUEVE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROMOVENTE: ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

TEPJF SALA SUPERIOR
OFICINA DE PARTES

2018 NOV 18 22:39 01s

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, militante del Partido Acción Nacional – carácter que ha quedado acreditado en autos–, por mi propio derecho, personalidad que acredito mediante copia de mi credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y que acompaño al presente escrito como **ANEXO UNO**, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Monte Pelvoux 220, Despacho 901, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los **CC. FERNANDO ESTEBAN ISMAEL SALMERÓN SERNA, DAVID RIVERA CASTRO, CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ PERAZA, GONZALO JOSÉ BOLIO BENÍTEZ, EMILIANO OAXACA PATERNA, MALCOLM HEMMER REBOLLEDO, FERNANDO POO MAYO, LUIS SÁMUEL MARTÍNEZ ATHIÉ, FERNANDO GÁNDARA RANGEL y ANDRÉS TRAMER FERNÁNDEZ.**

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 41, fracción VI, y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "**CPEUM**"), 40, incisos h) e i), de la Ley General de Partidos Políticos (la "**LGPP**") y 80, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (la "**LGSMIME**") acudo ante esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a promover un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de los actos que se describen a continuación. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 9 de la LGSMIME manifiesto lo siguiente:

- I. **Nombre del actor.** Se expresa en el proemio del presente escrito.
- II. **Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.** Se expresa en el proemio del presente escrito.

- III. **Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente.** Se acompaña copia de la Credencial para Votar del suscrito como **ANEXO UNO**.
- IV. **Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo.** Se expresa que el acto impugnado es la resolución de fecha 09 de noviembre de 2018 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, misma que confirma mi expulsión del Partido Político Partido Acción Nacional (el "**PAN**") en violación de mis derechos humanos y político-electorales.

Autoridad Responsable: Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN (la "**Autoridad**").

Igualmente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que dicha resolución me fue notificada personalmente el día 14 de noviembre de 2018, tal y como consta en la Cédula de Notificación que adjunto a este escrito como **ANEXO 2**.

- V. **Hechos en los que se basa la impugnación.** Se expresan en el apartado correspondiente.
- VI. **Agravios.** Se expresan en el apartado correspondiente.
- VII. **Pruebas.** Se ofrecen en el apartado correspondiente.

PROCEDENCIA

Es procedente el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en razón de que la resolución de fecha 09 de noviembre de 2018, misma que confirma la resolución de fecha 30 de junio de 2018 mediante la cual la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN determinó retirarme el carácter de militante del PAN, resulta violatoria de mis derechos político-electorales.

El artículo 80, inciso g), de la LGSMIME establece la procedencia del presente medio de impugnación por la afectación de los derechos político-electorales de los ciudadanos por parte de los partidos políticos:

Artículo 80.

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:

g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo

anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.

En el caso en concreto se afectó mi derecho político-electoral de afiliación, mismo que se tutela en el artículo 35, fracción III, CPEUM:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

El artículo 2 de la LGPP también tutela expresamente el derecho de afiliación, de la siguiente manera:

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,

Toda vez que confirmo privarme del carácter de militante del PAN, la resolución de fecha 09 de noviembre resulta impugnada por medio del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales pues afecta mis derechos político-electorales, particularmente el derecho de afiliación, tutelados en los artículos citados.

En torno a la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de violaciones al derecho de afiliación, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el "TEPJF") se ha pronunciado conforme a la siguiente tesis jurisprudencial:

JURISPRUDENCIA 36/2002

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. En conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I) De votar y ser votado en las elecciones

populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva.

En razón de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 83, inciso a), fracción III, de la LGSMIME es competente la Sala Superior del TEPJF para conocer en única instancia de las violaciones que me causa la resolución de fecha 09 de noviembre de 2018.

Artículo 83.

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano:

a) La Sala Superior, en única instancia:

II. En los casos señalados en los incisos e) y g) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley;

En ese sentido, queda claro que deberá ser esta Sala Superior la que conozca de violaciones al derecho de afiliación que causen los partidos políticos a sus militantes, esto es, las resoluciones partidistas que expulsan a un ciudadano y lo privan de su militancia partidista y por lo tanto el presente juicio electoral, lo cual acontece en el caso en concreto toda vez que la presente violación a mis derechos de afiliación deriva de mi expulsión del PAN.

DEFINITIVIDAD

Por otro lado, conforme al principio de definitividad en materia de impugnación electoral, contemplado en el artículo 80, numeral 3, de la LGSMIME, deben ser agotadas todas las instancias previas antes de acudir al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Lo anterior implica que los actos que se impugnen por medio del presente juicio deben ser definitivos.

Así pues, dicho requisito procedimental surte en razón del carácter de la resolución que se impugna puesto que conforme al artículo 59, fracción IV, del Reglamento de Aplicación de Sanciones del PAN, las resoluciones dictadas en recurso de reclamación serán definitivas:

Artículo 59. Para el desahogo del Recurso de Reclamación la Comisión de Orden del Consejo Nacional procederá de la forma siguiente:

(...)

IV. Una vez recibidos los escritos de las partes o transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de Orden emitirá su resolución que tendrá el carácter de definitiva.

Como puede apreciarse claramente, en razón de que la resolución de fecha 09 de noviembre de 2018 fue emanada de un recurso de reclamación es que es de carácter definitivo y no existe medio o instancia partidista al que pueda acudir para proteger el ejercicio y goce de mi derecho político-electoral de afiliación.

Por lo tanto acudo ante esta Sala Superior, haciendo uso del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano como un medio extraordinario de impugnación en materia electoral.

LEGITIMACIÓN

En relación a la legitimación procesal, resulta evidente que me asiste derecho a impugnar la resolución de 09 de noviembre de 2018 mediante el presente juicio, mismo que promuevo por mi propio derecho, toda vez que la misma incide directamente en mi esfera jurídica y afecta el ejercicio y goce de mis derechos político-electorales.

OPORTUNIDAD

Tal y como consta en la Cédula de Notificación que adjunto a este escrito como **ANEXO 2**, la resolución impugnada me fue notificada el día miércoles 14 de noviembre de 2018, por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1, de la LGSMIME, el plazo de los cuatro días para presentar el presente recurso empezó a contar el día siguiente a su notificación, es decir, el jueves 15 de noviembre, por lo que, al presentar este escrito el domingo 18 de noviembre, el requisito de oportunidad se encuentra cumplido.

En razón de lo anterior, a continuación, se expresan los antecedentes y hechos en los que se basa la impugnación:

HECHOS

PRIMERO.— En 2001 fui Director General de la fundación Miguel Estrada Iturbide del PAN; en donde tuve la oportunidad de conocer de cerca los valores y principios de Acción Nacional.

SEGUNDO.— En 2004 convencido por el poder transformador de la política, acepté mi primer cargo público cuando fui nombrado Subsecretario de Planeación Energética y

Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía durante la administración del primer panista en llegar a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada.

TERCERO.— En 2004 en uno de mis primeros actos de disidencia frente a la dirigencia del Partido Acción Nacional, renuncié a dicho cargo público para apoyar al entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, para contender por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, lo anterior a pesar de que éste no contaba con el apoyo del entonces presidente Vicente Fox.

CUARTO.— En agosto de 2007, debido a mi creciente vocación democrática por el servicio nacional y en pos del bien común, solicité mi afiliación y fui admitido como miembro afiliado del PAN.

QUINTO.— En 2009 tuve el honor de ser nombrado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con lo cual me convertí en el primer militante panista en la historia de México en ejercer ese cargo.

SEXTO.— En 2011 contendí por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, proceso en el cual mis oponentes fueron Santiago Creel Miranda y Josefina Vázquez Mota y del cual resultó triunfadora la segunda. A pesar de lo cual seguí participando por los ideales de Acción Nacional con mayor convicción que nunca.

SÉPTIMO.— En 2012 fui incluido como candidato al Senado de la República por el PAN mediante la lista nacional plurinominal, en la cual ocupé la posición número 1.

OCTAVO.— En ese mismo año tuve el honor de ser nombrado Presidente del Senado de la República, cargo que ejercí hasta agosto de 2013, así como Coordinador de la Bancada de Senadores del PAN para la LXII Legislatura.

NOVENO.— En 2013 el Presidente Nacional del PAN determinó revocar mi nombramiento como Coordinador de la Bancada de Senadores del PAN para la LXII Legislatura. A pesar de lo anterior, confirmé mi fidelidad a los principios fundantes de Acción Nacional y seguí como integrante de la bancada y como miembro del Partido Acción Nacional.

DÉCIMO.— En 2014 durante el primer proceso en la historia del PAN en el que la totalidad de los militantes tendrían el derecho a votar por la dirigencia nacional, competí por la Presidencia Nacional del PAN contra Gustavo Madero Muñoz. Perdí y acabé en segundo lugar, con el apoyo del 42.86% de los militantes del PAN. A pesar de ello, mantuve mi convicción panista y seguí en las filas del partido, defendiendo sus principios en el Senado de la República.

DÉCIMO PRIMERO.— En 2017 fui nuevamente designado como Presidente del Senado de la República, sin el apoyo de la dirigencia del Partido Acción Nacional y sin el apoyo de mis compañeros de bancada, cargo que ostento actualmente.

DÉCIMO SEGUNDO.— El 11 de enero de este año, después de mucho tiempo de haber permanecido en silencio, expresé que considero que la persona que actualmente dirige al Partido Acción Nacional, del cual soy orgullosamente militante, es corrupta. En dicha declaración señalé que:

“Yo creo que el Partido Acción Nacional es demasiado grande, es demasiado importante a la historia democrática de México, para que una dirigencia corrupta como la que tenemos actualmente, termine con una historia de grandes contribuciones en la democracia y a nuestro país.”

El Comité Ejecutivo Nacional no solicitó mi expulsión por dicha acción.

DÉCIMO TERCERO.— El 20 de mayo de este año anuncié que, al no poder otorgar mi voto para la elección presidencial a una persona que no representa los valores y principios del Partido Acción Nacional, votaría por alguien que conozco desde la carrera y que sé que sí ha llevado a cabo dichos principios, aun cuando no ha militado en nuestro partido político: mi excompañero universitario —los dos estudiamos juntos, aunque en distintas carreras, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)—, excompañero en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —él ya era Subsecretario cuando yo tuve el honor de ser nombrado Secretario—, y excompañero de gabinete del Ejecutivo Federal durante el mandato del Presidente Felipe Calderón Hinojosa —él fue nombrado Secretario de Energía cuando yo seguía siendo Secretario de Hacienda y Crédito Público—, José Antonio Meade Kuribreña.

DÉCIMO CUARTO.— El 11 de junio, siguiendo la convicción que ya había exteriorizado, con base en las pruebas que fueron saliendo a la luz pública en los últimos meses, y frente a la inacción de las autoridades intrapartidistas, presenté una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del actual dirigente con licencia del Partido Acción Nacional.

DÉCIMO QUINTO.— En fecha 14 de junio de 2018 el Comité Ejecutivo Nacional del PAN promovió Solicitud de Inicio de Procedimiento de Sanción en mi contra ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN.

DÉCIMO SEXTO. — En fecha 30 de junio de 2018 la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN determinó sancionarme con la expulsión del PAN, resolución que recurro por medio del presente escrito.

DÉCIMO SÉPTIMO. — Inconforme con la sanción de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN, y ante la falta de notificación del mismo, en fecha 04 de julio de 2018 promoví Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante esta Sala Superior, al cual fue asignado el número de expediente SUP-JDC-403/2018.

DÉCIMO OCTAVO. – En fecha 10 de julio de 2018 esta Sala Superior determinó reencauzar dicho Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano a recurso de Reclamación ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, ordenando la resolución del mismo “dentro de un plazo razonable”. Dicha Comisión le asignó el número de expediente CJ/REC/13/2018.

DÉCIMO NOVENO. – Habiéndome sido notificada la resolución de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN, nuevamente promoví Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante esta Sala Superior, al cual fue asignado el número de expediente SUP-JDC-412/2018.

VIGÉSIMO. – En fecha 17 de julio de 2018 esta Sala Superior determinó reencauzar dicho Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano a recurso de Reclamación ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, ordenando la resolución del mismo “dentro de un plazo razonable”. Dicha Comisión le asignó el número de expediente CJ/REC/16/2018.

VIGÉSIMO PRIMERO. – Ante la falta de resolución de los recursos por parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, promoví respectivos incidentes de inejecución ante esta Sala Superior, mismos que fueron declarados fundados mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2018 apercibiendo a la Comisión para que resolviera dentro de un plazo máximo de 10 días.

VIGÉSIMO SEGUNDO. – Habiendo acumulado el recurso de reclamación CJ/REC/16/2018 al CJ/REC/13/2018, mediante resolución de fecha 01 de octubre de 2018 la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, con 3 votos a favor y 2 en contra, resolvió el recurso de reclamación CJ/REC/13/2018, confirmando la resolución de expulsión dictada por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN.

VIGÉSIMO TERCERO. – En fecha 08 de octubre de 2018 se me notificó personalmente la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN por medio de la cual se confirmó mi expulsión como militante del PAN, misma que impugno por medio del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

VIGÉSIMO CUARTO. – En fecha 12 de octubre de 2018 promoví Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, al que le fue asignado el expediente SUP-JDC-502/2018 y fue resuelto por esta Sala Superior en fecha 7 de noviembre de 2018.

VIGÉSIMO QUINTO. – En fecha 14 de noviembre de 2018 se me notificó personalmente la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de fecha 09 de noviembre de 2018 por medio de la cual se confirmó mi expulsión como militante del PAN, misma que impugno por medio del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

AGRAVIOS.

Los siguientes agravios demuestran la inconstitucionalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable y, con ello, la violación a mi derecho político-electoral de afiliación pues dicha resolución confirma mi expulsión del Partido Acción Nacional.

1. Primer agravio. Ausencia de tipicidad de los hechos de los por los que se me acusa, con una excepción.

La autoridad responsable señala que los tres artículos del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional con base en los cuales se me expulsó siguen estando vigentes.

Lo anterior puesto que, en primer lugar, a su parecer:

"[...] el análisis realizado por la parte actora resulta incorrecto toda vez que contrario a lo que afirma, el Reglamento sobre aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional no quedó automáticamente derogado al haber entrado en vigor la actual reforma a los Estatutos del Partido Acción Nacional, en virtud de que de la literalidad del Transitorio invocado, resulta evidente que solamente quedará derogado todo aquello que CONTRAVENGA lo dispuesto en ellos, sin que este órgano jurisdiccional advierta que en el caso concreto se haya hecho alusión a una disposición que contravenga los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, por lo que el agravio resulta INFUNDADO."¹

Frente a esta afirmación debo señalar que con una simple lectura de mi escrito de impugnación se puede constatar que en ningún momento afirmé que todo el Reglamento había quedado derogado, sino únicamente tres de las fracciones de su artículo 16 – específicamente las fracciones IV, V y XI, del apartado A–. Luego entonces, es erróneo lo que afirma la autoridad responsable y, por tanto, no da respuesta a mi agravio.

En segundo lugar, la autoridad responsable señala que:

"[...] el análisis realizado por la parte actora resulta incorrecto toda vez que contrario a lo que afirma, el mismo artículo 128 de los Estatutos Generales del Partido, en su numeral 2, establece que los funcionarios que incurran en violaciones a los artículos estatutarios respectivos, serán sancionados en los términos señalados por estos Estatutos y Reglamentos correspondientes.

Artículo 128

1. [...]

2. Los funcionarios que incurran en violaciones a los artículos estatutarios respectivos, serán sancionados en los términos señalados por estos Estatutos y Reglamentos correspondientes."²

¹ Foja 12, anverso, de la resolución impugnada.

² Foja 12, reverso, de la resolución impugnada.

La autoridad responsable intenta otorgar fundamento estatutario a las fracciones IV, V y XI, del Apartado A del artículo 16 del Reglamento al decir que el artículo 128, numeral 2, del Estatuto remite a los "reglamentos correspondientes". Sin embargo, si se lee el numeral completo se puede ver que éste únicamente refuerza mi dicho: las causales de expulsión únicamente pueden estar en el Estatuto, no en un reglamento. El numeral 2 del artículo 128 es claro: "Los funcionarios que incurran en violaciones a los artículos estatutarios respectivos [...]".

Es decir, la conducta que actualiza la sanción –en este caso la expulsión– únicamente puede estar en el Estatuto. La reglamentación de la sanción puede estar en un Reglamento, pero no su causal.

En tercer lugar, la autoridad responsable señala que:

"Por su parte el artículo 13 de los Estatutos Generales del Partido, establece que es obligación de los militantes asumir y cumplir los Principios de Doctrina del Partido, Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones que emitan los órganos directivos en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 12

1. Son obligaciones de los militantes del Partido:

a) Asumir y cumplir los Principios de Doctrina del Partido, Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones que emitan los órganos directivos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En tales consideraciones, el artículo 16 del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones, aplicable al caso en concreto, establece que son infracciones de los militantes, incluyendo servidores públicos, entre otras, el ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido. La no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada y apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios.

Artículo 16.

A. Se considerará infracción de los miembros activos del Partido:

[...]

IV. El ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido.

V. La no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada.

[...]

XI. Apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios.

[...]

IV. Las demás que señalen los Estatutos o Reglamentos del Partido.

[...]

De lo anterior, esta autoridad observa que, contrario a lo manifestado por el actor, las conductas por las que la Comisión de Orden y Disciplina lo sancionó, encuentra sustento y vigencia los artículo 12, 13 y numeral 2 del artículo 128 de los Estatutos Generales del Partido en el artículo, así como en el artículo 16 del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones [...]"³

³ Foja 12, reverso, y Foja 13, anverso y reverso, de la resolución impugnada.

Como se puede ver, la autoridad responsable afirma que los Estatutos imponen como una de las obligaciones de los militantes del Partido Acción Nacional el cumplir con los Reglamentos del Partido y, en ese sentido, el artículo 16, apartado A, del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones, en sus fracciones IV, V y XI, establece las causales de expulsión que ahora impugno. Por lo tanto, a juicio de la autoridad responsable, dichas fracciones reglamentarias sí tienen sustento estatutario.

Este argumento es incorrecto por lo siguiente.

Es verdad que los Estatutos imponen como obligación de los militantes cumplir con los Reglamentos del Partido Acción Nacional. Sin embargo, ello no lleva como consecuencia que los Reglamentos del Partido Acción Nacional puedan prever las causales de expulsión del Partido. Afirmar lo contrario sería lo mismo que afirmar que el titular del Ejecutivo Federal puede prever en los Reglamentos que emita las causales de las penas privativas de libertad de los ciudadanos mexicanos en virtud de que éstos tienen la obligación de cumplir con los Reglamentos emitidos por el Ejecutivo Federal. El argumento de la autoridad responsable, como se puede ver, es *non sequitur*.

En su momento afirmé que existía una contradicción entre los Estatutos del Partido Acción Nacional y el Reglamento en cuestión puesto que las fracciones IV, V y XI del Reglamento ampliaban las causales de expulsión previstas en los Estatutos.

El artículo 16, apartado A, fracciones IV, V, VIII y XI, del Reglamento señala:

Artículo 16.

A.- Se consideran infracción de los miembros activos del Partido:

[...]

IV. El ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido.

V. La no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada.

[...]

VIII. La realización de actos de deslealtad al Partido.

[...]

XI. Apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios.

[...]

Por su parte, el artículo 32 del Reglamento señala:

De las causas de expulsión

Artículo 32. Procede la expulsión de un miembro activo del Partido cuando de manera grave o reiterada se cometa alguna de las infracciones o actos de indisciplina, conforme a los artículos 16 y 17 del presente Reglamento.

Es decir, para el artículo 16, apartado A, del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones, entre otras, son causales de expulsión —si se cometen de manera grave o reiterada— las

conductas previstas en sus fracciones IV –atacar a la dirigencia del partido–, V –la no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada–, VIII –la realización de actos de deslealtad al Partido– y XI –apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios–.

Sin embargo, para el artículo 128, párrafo 1, incisos d), e), y f), de los Estatutos las causales de expulsión son:

Artículo 128

1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción de estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes del Partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos partidistas, inhabilitación para ser dirigente o candidato, o expulsión del Partido, conforme a las siguientes disposiciones:

[...]

d) La suspensión de derechos será acordada por **indisciplina, inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las de militante del Partido, así como en el caso de que incurran en difamación o calumnias en contra de militantes o candidatos del partido.** La suspensión de derechos implica la separación de las actividades del Partido;

e) La inhabilitación para ser dirigente o candidato, será declarada en los casos de **deslealtad al Partido o incumplimiento de las funciones como dirigente o funcionario público;** y

f) **La expulsión** podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del Partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político.

Como se puede ver, en los Estatutos las causales de expulsión son menos, y no incluyen tres de las cuatro con las que se me enjuició: la contemplada en la fracción IV –atacar a la dirigencia del partido–, la de la fracción V –la no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada– y aquella de la fracción XI –apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios–.

La única cuestión a resolver –y que no respondió la autoridad responsable– es si el **Reglamento puede establecer causales de expulsión adicionales a las establecidas en el Estatuto.**

Por una cuestión de jerarquía normativa lo anterior no es posible. Ello debido a que los Estatutos no sólo fueron emitidos con posterioridad al Reglamento sino que tienen un rango normativo superior. Por una cuestión de seguridad jurídica y "reserva de ley" –en este caso "reserva estatutaria"–, si el órgano constituyente del Partido Acción Nacional –el único órgano legislativo que existe en el Partido– determinó delimitar taxativamente las causales de expulsión en los Estatutos Generales del Partido y no delegó la facultad de prever causales adicionales al órgano ejecutivo del Partido –el Comité Ejecutivo Nacional–,

quien es el que emite los Reglamentos –y el que emitió el Reglamento en cuestión⁴–, es inconcuso que éste no está facultado para preverlas. Como ya señalé, admitir lo contrario sería lo mismo que afirmar que el Presidente de la República puede prever nuevos tipos penales a través de un Reglamento del Código Penal Federal. El órgano ejecutivo del Partido Acción Nacional –al igual que el órgano ejecutivo de la república mexicana– no está facultado para adicionar supuestos normativos que restrinjan derechos. Por lo tanto, juzgarme con base en las fracciones IV, V y XI del artículo 16, apartado A, del Reglamento fue inconstitucional, y la autoridad responsable no demostró lo contrario.

2. Segundo agravio. Violación al principio de taxatividad de las normas que acarrearán una sanción.

En el momento procesal oportuno alegué que el único artículo del Reglamento, no derogado por los Estatutos, con base en el cual se me había juzgado –a saber, el artículo 16, apartado A, fracción VIII– era inconstitucional porque viola el principio de taxatividad que deben respetar las normas que acarrearán una sanción. Lo anterior en virtud de que:

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de taxatividad de las normas que acarrearán una sanción es extensivo no sólo a la autoridad que aplica la norma sino al creador de la misma. Así, al creador normativo "le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reproachable"⁵. En ese sentido, "el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma."⁶

Lo anterior no significa que el creador normativo deba definir todos los términos o vocablos que utilice, ni tampoco que tenga prohibido usar tecnicismos ajenos a la mayoría de la población. Empero, debe cerciorarse que los destinatarios de la norma, aquéllos que serán sus sujetos activos, puedan deducir, razonablemente, qué conductas están prohibidas y cuáles no⁷. En la materia electoral, en el caso de los regímenes disciplinarios de los partidos políticos, esto ha sido confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

[...] en una organización democrática, la imposición de una sanción supone la existencia de determinadas garantías, como son:

[...]

d) La tipificación. Para seguridad de los afiliados, es importante que las conductas sancionables se encuentren predeterminadas, de una manera descriptiva, tratando en lo posible de evitar la ambigüedad.

⁴ TRANSITORIOS

[...]

SEGUNDO. Este Reglamento de Sanciones fue aprobado en sesión de Comité Ejecutivo Nacional en fecha 05 de diciembre de 2005, mismo que aboga el Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones vigente desde fecha 01 de julio de 1993.

⁵ PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.

[...]

Tesis: 1ª./J. 54/2014 (10ª.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Pag. 131: Jurisprudencia (Constitucional).

⁶ Ídem.

⁷ Ibíd.

[...].⁸

Sin embargo, ello no sucede con las normas en cuestión. Como ya he señalado las normas analizadas son el artículo 16, apartado A, fracción VIII, del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones y el artículo 128, párrafo 1, incisos d), e), y f), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional:
[...]

Para que la norma cumpliera con el principio de taxatividad se deberían poder enumerar *taxativamente* todas y cada una de las conductas que englobaría. ¿Es posible enumerar los actos que representan una deslealtad al Partido? ¿O, por el contrario, se generan "dudas, incertidumbre y confusión"⁹ y, por lo tanto, se vuelve discrecional la aplicación de la norma?

Al no poder determinarse de manera enumerativa los actos que constituyen una deslealtad al Partido o una indisciplina, las normas "genera(n) un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica y se transfiere al juzgador la elección de la actualización, que puede decidir a partir de apreciaciones subjetivas o interpretaciones abiertas y generales desde un esquema cerrado o estricto de aplicación o tan abierto que cualquier elemento [...] es válido para colmar los supuestos hipotéticos descritos en la norma [...]"¹⁰. Por lo tanto, son inconstitucionales."¹¹

Contrario a lo anterior, para la autoridad responsable la norma en cuestión no viola el principio de taxatividad puesto que:

"[...] se debe entender que el significado de la palabra **DESLEALTAD**, como la **falta o carencia de lealtad**, de un sentimiento de franqueza, gratitud o fidelidad que muestra algunas personas y también del cumplimiento del honor, así mismo la **ingratitud, falsedad, vileza o la infidelidad**.

En tales consideraciones, se entiende que los actos de Deslealtad se refiere, como lo señalo la Comisión de Orden, no solo fue en su libertad de expresión como ciudadano, si no por el contrario trasciende de la libertad de expresión constitucionalmente establecida en la medida en que, derivado de la otrora condición de representante popular por el Partido Acción Nacional del hoy actor, las manifestaciones realizadas tuvieron un **carácter público, ventilando asuntos internos de este instituto político en medios de comunicación locales y nacionales, impactando en consecuencia en la percepción ciudadana de la imagen y prestigio tanto del Partido Acción Nacional, sus instituciones y la candidatura postulada a la Presidencia de la República**, generando así un daño e impacto directo a los fines estatutarios y principios de este instituto político y, por tanto, encuadrando en la conducta sancionable por la normatividad interna.

[...]

Por lo anterior, a juicio de esta Comisión, las conductas realizadas por el actor (atacar a la dirigencia Nacional, así como desacreditar la honorabilidad del candidato a la Presidencia de Acción Nacional) se configuración de actos de deslealtad a este instituto político al afirmar, toda vez que las mismas tuvieron un carácter público, ventilando asuntos internos de este instituto político en medios de comunicación locales y nacionales, impactando en consecuencia en la percepción ciudadana de la

⁸ Ver sentencia dentro del expediente SUP-JDC-781/2002.

⁹ **DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 165 BIS, FRACCIONES I, IV Y VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.** Tesis: 1ª. CCCLXXIII/2015 (10ª.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. Pag. 966. Tesis Aislada (Constitucional).

¹⁰ Ídem.

¹¹ Página 20 del escrito de impugnación en contra de la resolución de expulsión.

imagen y prestigio tanto del Partido Acción Nacional, sus instituciones y la candidatura postulada a la Presidencia de la República, generando así un daño e impacto directo a los fines estatutarios de este instituto político y, por tanto, encuadrando en la conducta sancionable por la normatividad interna [...]"¹²
(negritas y subrayado en el original)

Como se puede ver, para la autoridad responsable, la norma estatutaria con base en la cual se me expulsó —la cual tipifica la "realización de actos de deslealtad"¹³—, sí cumple con el principio constitucional de taxatividad —es decir, que "el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma"¹⁴—.

Lo anterior en virtud de que un acto de deslealtad es un acto de "ingratitude, falsedad, vileza" y el haber "ventilado asuntos internos de este instituto político en medios de comunicación locales y nacionales" es justamente eso. Este razonamiento no responde al agravio, simplemente transmuta un concepto —"deslealtad"— en otro —"infidelidad"— y afirma que mi conducta se encuadra en este nuevo concepto. Este es incorrecto y, por tanto violatorio de mis derechos político-electorales.

En primer lugar, como ya mencioné, la violación del principio de taxatividad se da cuando una norma no permite a sus destinatarios conocer con claridad las conductas enmarcadas en ella. La norma puede usar tecnicismos, puede usar conceptos especializados que sólo una parte minúscula de la población entienda, eso no es un problema. El problema deviene cuando los destinatarios de la norma —en este caso los militantes del Partido Acción Nacional— no pueden conocer qué está y qué no está prohibido.

La respuesta de la autoridad responsable lleva a concluir que cualquier acto de "ingratitude, falsedad, vileza o infidelidad" son actos de "deslealtad". Lo cual está muy bien, pero obvia el razonamiento toral de la discusión: ¿cuáles son esos actos?

¹² Foja 27, reverso, y foja 28, anverso y reverso, de la resolución impugnada.

¹³ Artículo 128

1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción de estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes del Partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos partidistas, inhabilitación para ser dirigente o candidato, o expulsión del Partido, conforme a las siguientes disposiciones:

[...]

e) La inhabilitación para ser dirigente o candidato, será declarada en los casos de **deslealtad al Partido** o incumplimiento de las funciones como dirigente o funcionario público; y

f) **La expulsión** podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del Partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político.

¹⁴ PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. Tesis: 1ª./J. 54/2014 (10ª.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Pag. 131. Jurisprudencia (Constitucional).

La ingratitud, falsedad, vileza e infidelidad son únicamente adjetivos que una persona puede utilizar para *calificar* una conducta. La pregunta aquí es, bueno, y ¿cuáles son esas conductas que pueden ser calificadas con esos adjetivos? La autoridad responsable no lo dice.

Así, para la autoridad responsable *cualquier* conducta puede subsumirse en la norma impugnada siempre y cuando el órgano decisor—en este caso la Comisión de Orden— lo determine: una conducta es desleal cuando el juzgador diga que es desleal. Esa es una tautología y justamente por eso es violatoria del principio constitucional de taxatividad.

Ahora, decir que incumplir con alguna de las obligaciones que tienen los militantes es equivalente a realizar un acto de deslealtad destruiría el principio de tipicidad, puesto que entonces las causales de expulsión serían innecesarias: ¿por qué están enumeradas en el artículo 128 de los Estatutos si en realidad cualquier infracción puede ser causal de expulsión? Esa interpretación de la autoridad responsable no se sostiene.

3. Tercer agravio. Inconstitucionalidad de la norma que prevé como causal de expulsión los "actos de deslealtad" entendidos como la obligación de votar por todos y cada uno de los candidatos emanados del partido político en el cual se milite.

Como ya ha quedado precisado a lo largo de este escrito, la Comisión de Orden y Disciplina Partidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional me juzgó y me expulsó del partido con fundamento en la norma estatutaria¹⁵ y reglamentaria¹⁶ que

¹⁵ Artículo 128

1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción de estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes del Partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos partidistas, inhabilitación para ser dirigente o candidato, o expulsión del Partido, conforme a las siguientes disposiciones:

[...]

d) La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las de militante del Partido, así como en el caso de que incurran en difamación o calumnias en contra de militantes o candidatos del partido. La suspensión de derechos implica la separación de las actividades del Partido;

e) La inhabilitación para ser dirigente o candidato, será declarada en los casos de **deslealtad al Partido o incumplimiento de las funciones como dirigente o funcionario público;** y

f) **La expulsión** podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del Partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político.

¹⁶ Artículo 16.

A.- Se consideran infracción de los miembros activos del Partido:

[...]

VIII. La realización de actos de deslealtad al Partido.

[...]

establece como infracción de los miembros activos del Partido Acción Nacional la realización de actos de "deslealtad" al Partido.

Arriba ya alegué por qué esa norma, en abstracto, es inconstitucional: viola el principio constitucional de certeza jurídica, en su modalidad del principio de taxatividad, puesto que no permite al usuario de la norma conocer con anterioridad qué actos constituyen una actualización de la misma. Es decir, no es posible conocer qué acto representa un "acto de deslealtad".

En este apartado quiero alegar algo distinto: la *aplicación* de la norma que confirmó la autoridad responsable también es inconstitucional.

La autoridad responsable confirmó la interpretación de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de que la negativa a votar por el candidato a la presidencia de la república emanado del Partido Acción Nacional representaba un "acto de deslealtad" y, por lo tanto, se configuraba la infracción tipificada en los Estatutos y el Reglamento¹⁷. Luego entonces debía ser expulsado del partido.

Esta interpretación es inconstitucional, en primer lugar, porque impone a los militantes del Partido Acción Nacional una obligación no prevista ni en la Constitución, ni en las

Artículo 32. Procede la expulsión de un miembro activo del Partido cuando de manera grave o reiterada se cometa alguna de las infracciones o actos de indisciplina, conforme a los artículos 16 y 17 del presente Reglamento.

¹⁷ "[...] la Comisión de Orden y Disciplina, en el apartado denominado "B) ANALIZAR SI LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS TRASGREDEN O NO LA NORMATIVIDAD INTERNA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL" en su fracción II denominada "Las conductas acreditadas vulneran la normatividad del Partido Acción Nacional", determinó que el militante de manera expresa realizó actos y manifestaciones tendientes a apoyar a un candidato a Presidente de la República, postulado por una coalición electoral, obviamente diverso al del Partido Acción Nacional, dentro del mismo proceso electoral, lo que configura de manera reiterada y sistemática, la infracción establecida en el artículo 16, Apartado A, fracciones VIII y XI del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, como se aprecia en el siguiente extracto de la resolución:

El militante de manera expresa realizó actos y manifestaciones tendientes a apoyar a un candidato a Presidente de la República, postulado por una coalición electoral, obviamente diverso al del Partido Acción Nacional, dentro del mismo proceso electoral, lo que configura, de manera reiterada y sistemática, la infracción establecida en el artículo 16, Apartado A, fracción VIII y XI del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, mismas que establece lo siguiente:

Artículo 16.

A. Se consideran infracción de los miembros activos del Partido:

[...]

VIII. La realización de actos de deslealtad al Partido;

[...]

XI. Apoyar a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios."

Foja 19, anverso y reverso, de la resolución impugnada.

leyes, ni en la normativa interna del partido Acción Nacional: tener que votar por todos y cada uno de los candidatos que postule el Partido Acción Nacional.

En segundo lugar, es inconstitucional porque niega mi derecho constitucional a la libertad de voto.

El artículo 41 constitucional señala que:

Artículo 41. [...]

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
[...]

De manera más específica, el artículo 41 constitucional afirma que:

Artículo 41. [...]

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Quisiera detenerme particularmente en tres porciones normativas de este artículo constitucional: 1) "Los partidos políticos [...] como organizaciones de ciudadanos (tienen como fin) hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público"; 2) "el sufragio [...] libre"; y 3) "quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales [...] en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa."

La primera, que los partidos políticos como organizaciones de ciudadanos que son tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, tiene como implicación que los partidos políticos son un instrumento al servicio de los ciudadanos, no un fin en sí mismos. Los partidos políticos sirven para que los ciudadanos puedan llegar al poder, no al revés.

La segunda, que el sufragio es libre, debe analizarse y preguntarse ¿qué significa exactamente que el sufragio es libre? ¿Qué quiere decir la Constitución cuando me da el derecho de que mi voto sea libre? Porque ¿me da el derecho o sólo es retórica?

Si la Constitución me da el derecho de votar libremente el único significado posible de ello es que yo puedo votar por quien yo quiera sin que haya consecuencias negativas en virtud

del ejercicio de mi libertad. Entender el derecho a la libertad de otra manera sería lo mismo que decir: "tienes el derecho —eres libre— de cruzar la calle, pero si la cruzas te meto a la cárcel". Ahí no existe un derecho para cruzar la calle, sino una obligación de *no* cruzar. Si me dicen "tienes el derecho a votar por quien tu quieras, pero si votas por X entonces te meto a la cárcel", ¿es en verdad un derecho?; o ¿si me dicen "tienes el derecho a votar por quien tu quieras, pero si votas por X entonces te despido de tu trabajo"?; o ¿si me dicen "tienes el derecho a votar por quien tu quieras, pero si votas por X entonces te expulso del partido político al que perteneces? ¿Hay una diferencia entre alguna de estas tres preguntas?

Se dirá: pero ningún derecho es absoluto, todos tienen límites, y sus límites se encuentran en otros derechos. Eso es correcto, y yo no lo niego. La pregunta, entonces es ¿qué derecho constitucional choca con mi derecho a la libertad del voto?

Y se responde, el derecho de los partidos a normar su vida interna y a sancionar las infracciones cometidas en contra de sus reglas internas. Y eso es cierto. Pero, ¿no habíamos dicho que ningún derecho es absoluto? También, entonces, el derecho de los partidos políticos para autonormarse y castigar las conductas que violenten sus reglas internas encuentra sus límites en otros derechos.

¿Cómo solucionar el choque entre el derecho a la libertad del voto y el derecho de los partidos políticos a normar su vida interna y castigar las conductas que se alejen de sus reglas internas?

Es momento de introducir la tercera porción normativa del artículo 41 constitucional: están prohibidas las organizaciones gremiales en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

¿Cuál es la intención de la Constitución al prohibir a las organizaciones gremiales en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa? ¿No justamente la Constitución está buscando proteger la libertad del voto de las personas?

De esta última porción normativa se deduce que los partidos *no* pueden ser o comportarse como organizaciones gremiales o corporativas. Es decir, los partidos políticos tienen prohibido someter a sus militantes a prácticas gremiales o corporativas. Y ¿no es una práctica gremial o corporativa el llamado "voto corporativo"? Luego entonces, ¿no está prohibido en la Constitución el "voto corporativo"? Y ¿qué sería de la obligación de los militantes de votar por todos y cada uno de los candidatos postulados por el partido político al que pertenecen si no un llamado a votar corporativamente? Así, pues, se puede concluir que dicha previsión está prohibida constitucionalmente y, por lo tanto, cualquier norma interna de un partido político que la prevea es inconstitucional.

La interpretación de la autoridad responsable de que negarse a votar por el candidato a Presidente de la República es un acto de deslealtad, pues, es inconstitucional.

Esa es la conclusión, pero la premisa no puede ser otra si no que el derecho a la libertad de voto de los militantes de los partidos políticos no puede ser acotada por normas internas que los obliguen a votar por los candidatos emanados por su partido político, puesto que dicha práctica está prohibida constitucionalmente.

Pasemos ahora al penúltimo agravio.

4. Cuarto agravio. Ausencia de estudio de la autoridad responsable de los agravios que hice valer relativos a mi derecho a la libertad del voto, a no ser discriminado injustificadamente y a la objeción de conciencia.

En mi escrito de impugnación en contra de la Resolución de Expulsión dictada por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional hice valer como agravio la violación a mi derecho a la libertad del voto, la violación a mi derecho a no ser discriminado injustificadamente y la violación a mi derecho a la objeción de conciencia. Ninguna de las tres violaciones fueron abordadas por la autoridad responsable, lo cual viola la garantía constitucional de exhaustividad de las sentencias y, en consecuencia, mi derecho político-electoral de afiliación –ello puesto que la sentencia que no fue exhaustiva tiene como consecuencia confirmar una resolución que perjudica mi derecho de afiliación–; por lo que, por ese solo hecho la resolución impugnada debe ser revocada para efectos de que se dicte una nueva en la que se subsanen los vicios de la presente.

5. Quinto agravio. Violación de mi derecho a la libertad de expresión.

La autoridad responsable considera que mis expresiones de disenso sobre el actuar de la dirigencia del Partido Acción Nacional y del candidato Presidente de la República, así como las relativas a no votar por el mismo (aunque, tal y como obra en autos, en repetidas ocasiones afirmé que para otros cargos votaría por los candidatos del Partido Acción Nacional) trascienden mi derecho a la libertad de expresión:

"[...] El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público.

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.

[...]

La honra y dignidad, son valores universales contruidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de los individuos, de ahí que, a partir del menoscabo o degradación de los atributos de la personalidad es factible ilustrar sobre la vulneración de los derechos fundamentales precitados.

En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que ha reconocido el Constituyente y los Pactos Internacionales signados por el Estado Mexicano."¹⁸

En el mismo sentido, la autoridad responsable señala que:

"En el caso concreto se advierte, como ya se dijo en párrafos anteriores, las conductas realizadas por el actor, atentan contra la imagen del Partido Acción Nacional y sus representantes, así como que resultan contrarios a la normatividad interna del Partido Acción Nacional, en especial los artículos 1, 2, 8, 10, 12, 126 y 127 de los Estatutos Generales del Partido.

Resulta evidente que la parte actora, al realizar las conductas consistentes en atacar a la dirigencia y candidatura del Partido Acción Nacional, se dirigió a frustrar uno de los principales objetos de este instituto político consistente en buscar tener acceso al ejercicio democrático del poder, para lograr la prosecución de sus fines."¹⁹

Por último:

"[...] esta autoridad debe considerar que toda participación de la militancia de un instituto político, debe respetar y aceptar las reglas previstas en sus estatutos y normas secundarias, ya que, al afiliarse a un instituto político, el ciudadano acepta y conoce con antelación los principios, reglas, derechos y obligaciones del partido al que pretende pertenecer, mismos que pueden variar conforme al ejercicio de su derecho de autodeterminación.

Concluir lo contrario, conllevaría vulnerar el derecho de auto-organización de los partidos políticos, el cual se materializa en su posibilidad autodeterminación orgánica y funcional"²⁰.

De las transcripciones anteriores se puede concluir que para la autoridad responsable:

1. Sí tengo libertad de expresión, pero mis manifestaciones excedieron sus límites constitucionalmente permitidos. Y los excedieron porque: a) impactaron en la imagen y prestigio del PAN, sus instituciones y la candidatura postulada a la Presidencia de la República; y b) generaron un daño directo a uno de los principales objetivos de los partidos políticos: tener acceso al ejercicio del poder.
2. Al afiliarme al PAN acepté sus reglas, y una de ellas limitaba mi derecho a la libertad de expresión. Es decir, le impuse voluntariamente a mi libertad de expresión un límite adicional a los expresamente establecidos por la Constitución.

¹⁸ Foja 34, reverso, y foja 35, anverso, de la resolución impugnada.

¹⁹ Ídem foja 35, anverso y reverso.

²⁰ Ibíd. foja 36, anverso.

Veamos las dos afirmaciones por separado.

La primera, que excedí los límites de la libertad de expresión porque impacté la imagen y prestigio del PAN y le generé un daño, debe ser analizada desde la Constitución y no desde las normas del PAN. Realizar lo contrario sería leer e interpretar al sistema normativo mexicano de abajo hacia arriba y no, como se debe hacer, de arriba hacia abajo.

La Constitución señala que la manifestación de las ideas puede ser objeto de inquisición administrativa si ataca, entre otros, los derechos de terceros²¹. La Constitución no establece que la libertad de expresión esté prohibida si afecta derechos de terceros, sino únicamente que puede ser objeto de inquisición judicial y administrativa. Esto significa que, contrario a lo interpretado por la autoridad responsable, los límites que la Constitución impone a la libertad de expresión no son de "todo o nada", pero sí llaman a su regulación en la legislación secundaria. Es decir, cuando se afecten los derechos de terceros la libertad de expresión puede ser limitada, y será la legislación secundaria —o las legislaciones secundarias— la que determine de qué forma. Dicha legislación, sin embargo, no está por encima de la Constitución, por lo que su reglamentación podrá ser, en todo momento, materia de control constitucional.

La legislación secundaria que nos atañe en este caso y que, en ese respecto, podría limitar a la libertad de expresión, es la normativa interna del Partido Acción Nacional.

La autoridad responsable utiliza al artículo 16, apartado A, fracciones IV, V y VIII, del Reglamento Sobre Aplicación de Sanciones para fundamentar la existencia de los "derechos de terceros" como límite de la libertad de expresión. Dichas fracciones señalan:

Artículo 16

A. Se consideran infracción de los miembros activos del Partido:

[...]

IV. El ataque de hecho o de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido.

V. La no participación en la realización de los objetivos del Partido o hacerlo de manera indisciplinada.

[...]

VIII. La realización de actos de deslealtad al Partido.

[...]

Aquí el artículo relevante es el IV: el ataque de palabra a los principios, programas y a la dirigencia del Partido. Ya sabemos que los partidos políticos pueden reglamentar la libertad de expresión cuando ésta impacta derechos de terceros, pero la pregunta

²¹ **Artículo 60.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

constitucionalmente relevante es: ¿está constitucionalmente permitido que los partidos políticos castiguen la expresión del disenso interno con la expulsión?

Y aquí es donde creo que la respuesta es no y a cuyo análisis está llamada esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La respuesta es no, no está constitucionalmente permitido que los partidos políticos castiguen la expresión del disenso interno con la expulsión, porque los partidos políticos también se rigen por otros principios constitucionales y legales diferentes a la mera búsqueda del poder público.

En primer lugar, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público. Es decir, no se rigen por un principio dispositivo.

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deben ajustar su conducta a los principios del Estado democrático. Es decir, deben tener una vida interna democrática.

En tercer lugar, de conformidad con el artículo 1, inciso d), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, una de las finalidades del Partido Acción Nacional es la instauración de la democracia como sistema de convivencia²².

Del entramado normativo anterior tenemos que el PAN es una entidad de interés público, debe regirse por principios democráticos y busca el poder público para implementar la democracia como sistema de convivencia.

Si hay un principio relevante para la democracia es la libertad de expresión. Y, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de expresión se divide en dos: la libertad para asentir y la libertad para disenso.²³ Y, como lo ha aceptado el

²² Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

Artículo 1

El Partido Acción Nacional es una asociación de ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, constituida en partido político nacional, con el fin de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de la vida pública de México, tener acceso al ejercicio democrático del poder y lograr:

[...]

d) La instauración de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia.

²³ **LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.** La libertad de expresión en su vertiente social o política, constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En este sentido, se ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si se niega una faceta se niega a la otra.²⁴ En las democracias no hay libertad de expresión a modo.²⁵

Por lo tanto, al ejercer su facultad para limitar la libertad de expresión cuando ésta afecta derechos de terceros, ¿está constitucionalmente permitido que los partidos políticos castiguen la expresión del disenso interno con la expulsión? Del entramado normativo y de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede concluir que no, nuestro entendimiento constitucional no lo permite. Por lo tanto, la interpretación al respecto de la autoridad responsable es inconstitucional y debe ser revocada.

Es importante señalar que si llega a considerarse como relevante la pregunta sobre la honestidad de mi disenso, sobre el carácter genuino de mis expresiones, la respuesta es completamente afirmativa. Mis expresiones nacieron de una verdadera preocupación por el rumbo que mi partido político, aquél al que le he dedicado tantos años de mi vida y donde me he desenvuelto profesionalmente, estaba tomando —y en muchos sentidos sigue tomando—. Y mi opción era o me quedo callado y veo cómo la dirigencia del partido toma decisiones que yo creo son fundamentalmente opuestas a los principios de Acción Nacional, o ejerzo mi derecho constitucional y alzo mi voz.

sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. Dicho ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las decisiones de interés público.

Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2008101. Primera Sala. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I. Pag. 234. Tesis Aislada (Constitucional).

²⁴ "Los partidos políticos tienen como su objetivo fundamental el dar vitalidad y sustancia a la vida democrática de la comunidad, por lo que ellos mismos deben constituirse como un ejemplo de desarrollo democrático. **¿Puede hablarse de democracia dentro de una institución que no tolera la libertad de expresión de sus miembros y que sanciona cualquier manifestación que no sea del agrado de sus dirigentes?**" Ver resolución dentro del expediente SG-JDC-1219/2012. Y "La libertad de expresión es un elemento eficaz para lograr el debate abierto de las ideas que de lugar a diversas iniciativas o alternativas al interior del partido, que permitan el dinamismo y la participación de los afiliados en los asuntos de interés general. **Sin la libre expresión es difícil que un partido pueda desarrollarse, crecer y hacer aportaciones a la sociedad.**" Ver resolución dentro del expediente SUP-JDC-781/2002.

²⁵ Por ejemplo, ver el Voto de Minoría en el Amparo en Revisión 2676/2003, p. 3, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Es importante subrayar que el derecho que nuestra Constitución Federal garantiza no es simplemente un derecho a expresarse, sino un derecho a expresarse libremente. La libertad de expresión, en otras palabras, protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o, incluso, aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía consideran ofensivas. **La libertad de expresión es, en muchos sentidos, un derecho al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución Federal la consagre como un derecho fundamental** que, como es sabido, es una figura jurídica cuya razón de ser es la salvaguarda del individuo frente a la decisión de las mayorías. Los derechos tienen por naturaleza un carácter contramayoritario que obliga a desvincular su contenido y alcance protector de las opiniones y determinaciones tomadas por las mayorías en un cierto momento histórico." O la Tesis Aislada XXIX/2011 (10ª) en la que la Suprema Corte señaló que el derecho a la libertad de expresión no obliga a que todos piensen o se expresen de cierta forma, sino justamente a que todos puedan pensar y expresarse de cualquier manera, incluso cuando dichos pensamientos sean odiados por otras personas.

Espero no ver el día en que los jueces de este país castiguen a los ciudadanos que señalen los errores de sus gobernantes. A los ciudadanos preocupados por su país que estén dispuestos a hablar con el corazón en la mano en la arena pública. Y eso fue lo que yo hice.

Adjunto a este escrito como prueba se podrá encontrar una lista de todas las obligaciones que la normativa partidista le impone a sus militantes y a los militantes que ejercen un cargo de representación popular. También se podrán encontrar los comprobantes del cumplimiento de todas y cada una de mis obligaciones. Yo no soy un militante que hable ligeramente ni que actúe en contra de las normas internas de su partido. En los documentos adjuntos está la prueba de ello. Yo cumplo con mis obligaciones, voto con mi partido, asisto a sus reuniones, pago mis cuotas, respeto las decisiones de la mayoría, me capacito, rindo cuentas. Soy panista y estoy orgulloso de serlo.

Pero ello no precluye que exista el derecho constitucional al disenso y que la Constitución me de a mí y a todos los mexicanos la posibilidad de poder levantarnos e ir al foro público a hablar de temas que nos conciernen a todos —y vaya que la Presidencia de la República es un tema que nos concierne a todos— y en los que, algunas veces, no estaremos de acuerdo con la dirigencia del partido al que pertenecemos. Y no tenemos por qué estarlo, ese es el punto de la democracia: poder disentir.

En cuanto a lo que afirma la autoridad responsable de que "en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás" debo señalar lo siguiente. Tal y como la propia autoridad responsable lo afirma, en el contexto del debate público relativo a la elección de nuestros gobernantes, el margen de lo *decible* se ensancha. No sólo porque 1) se está en un momento de especial relevancia para la difusión de información entre la ciudadanía —el ámbito temporal de mis actos fue durante el proceso electoral—; sino también porque 2) la persona involucrada, el candidato a Presidente de la República postulado por el Partido Acción Nacional entró al foro público justamente como candidato a Presidente de la República, es decir, el sujeto pasivo de mis actos era una figura pública que se sometió voluntariamente al escrutinio público; y porque 3) las conductas del candidato que reproché todas eran de interés público; ninguna se limitaba al ámbito privado de la vida del candidato. Por lo tanto, mis manifestaciones y actos versaron sobre una figura pública, en un momento de especial importancia para el debate público, y sobre conductas únicas y exclusivamente de relevancia pública cometidas por el candidato.

Por último, en cuanto a que al afiliarme al PAN acepté sus reglas y una de ellas limitaba mi derecho a la libertad de expresión, es necesario señalar que las reglas de un partido político no están por encima de la Constitución y, por lo tanto, no pueden establecer prohibiciones adicionales a los derechos que ésta otorga. Los partidos pueden reglamentar los límites de los derechos constitucionales pero, como ya vimos, dichas

reglamentaciones no escapan al escrutinio constitucional y, en todo momento, deben apegarse a la norma básica. Los derechos constitucionales de los ciudadanos no desaparecen en el momento en que se convierten en militantes de un partido. Y, como ya vimos, los partidos no pueden prohibir el derecho al disenso, el cual, como también ya vimos, es una de las dos caras de la libertad de expresión.

Por lo tanto no, así como no está constitucionalmente permitido que una persona firme un contrato laboral por medio del cual renuncie a su libertad y voluntariamente se esclavice, tampoco está constitucionalmente permitido que los ciudadanos puedan renunciar a sus derechos constitucionales al momento en que se afilian a un partido político. Los derechos siguen a las personas, no desaparecen cuando un partido o un dirigente de un partido se siente incómodo por su ejercicio.

La resolución de la autoridad responsable, pues, al violar mi derecho constitucional al disenso debe ser revocada.

PRUEBAS

A continuación, exhibo copia simple de los documentos que a continuación se expresan sin perjuicio de exhibir los respectivos originales en caso de serme requerido.

PRIMERA. – Copia de mi credencial de elector, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, como **ANEXO UNO**.

SEGUNDA. – Copia simple de Cédula de Notificación mediante la cual el día 14 de noviembre de 2018 se me notificó personalmente la resolución de fecha 09 de noviembre de 2018 de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, como **ANEXO DOS**.

Dicho documento servirá para acreditar la oportunidad en la interposición del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

TERCERA. – Carpetas con notas y cuadros comparativos por cada año y resumen general del sentido de mis votaciones en las LXII y LXIII Legislaturas en relación al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, como **ANEXO TRES**.

Dicho documento servirá para acreditar el cumplimiento de la obligación de respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción del PAN, conforme al artículo 41, inciso b), de la LGPP.

CUARTA. – Comprobantes de pagos de las cuotas del PAN, como **ANEXO CUATRO**.

Dichos documentos servirán para acreditar el cumplimiento de la obligación de contribuir a los gastos del PAN, mediante cuotas ordinarias de carácter voluntario, conforme al artículos 12, inciso e), y 33, de los Estatutos Generales del PAN.

QUINTA. – Cuadro comparativo de obligaciones de los militantes del PAN, como **ANEXO CINCO**. Dicho documento servirá para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a los militantes del PAN y aquéllas dirigidas a los que ostentan cargos de elección popular.

SEXTA. – Acuse de solicitud de constancia de cumplimiento de obligaciones partidistas dirigida al Director del Registro Nacional de Militantes, como **ANEXO SEIS**. Dicho documento servirá para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se imponen a los militantes del PAN.

En virtud de que mi oficio de solicitud no ha tenido respuesta de parte del Director del Registro Nacional de Militantes, atentamente solicito a esta Sala Superior que, en términos de lo dispuesto por la normativa electoral correspondiente, solicite al Director del Registro Nacional de Militantes del PAN la entrega de la información en cuestión, pues ésta constituye una prueba en el presente juicio.

SÉPTIMA. – Acuse de solicitud al Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República de un registro de asistencias e inasistencias a las sesiones de las LXII y LXIII Legislaturas en el Senado de la República, como **ANEXO SIETE**. Dicho documento servirá para acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 41, inciso g), de la LGPP y 18 del Reglamento de las Relaciones entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados por el PAN.

En virtud de que mi oficio de solicitud no ha tenido respuesta de parte del Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República –y precisando que la información en posesión de los Grupos Parlamentarios es información pública, por lo que en términos de lo dispuesto por la normativa de acceso a la información no puede ser desaparecida ni borrada, aun cuando haya habido un cambio de Legislatura–, atentamente solicito a esta Sala Superior que, en términos de lo dispuesto por la normativa electoral correspondiente, solicite al Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República la entrega de la información en cuestión, pues ésta constituye una prueba en el presente juicio.

Las pruebas expresadas en los numerales Tercero a Séptimo fueron presentadas ante esta Sala Superior en el escrito de impugnación dentro del expediente SUP-JDC-502/2018, mismo que se encuentra en poder de esta Sala Superior, por lo que solicito que las mismas se tengan como ofrecidas y presentadas en el presente escrito.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes CC. **MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**, atentamente solicito:

PRIMERO. – Tenerme por presentado con la personalidad que ostento, admitiendo a trámite el presente Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. – Previo trámite de ley, declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, revocándolo de pleno derecho.

PROTESTO LO NECESARIO



ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2018.